



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

PUBLICACIÓN AVISO DE NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN # 4133.010.21.0. 367 DE 2020
15 / DIC / 2020

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Inciso 2 del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, por medio del presente AVISO, me permito notificar la Resolución # 4133.010.21.0. 367 del 15 de diciembre de 2020, por medio de la cual se revocan de oficio unos actos administrativos y se dictan otras disposiciones, contra la señora ALEYDA NAVIA, en calidad de persona natural, ubicado en la carrera 62A No. 5 – 50, barrio Cañaveralejo, comuna 19 de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, dentro del expediente sancionatorio ambiental con TRD: 4133.010.9.12. 463 - 2016.

De conformidad con lo ordenado en la Resolución # 4133.010.21.0. 367 del 15 de diciembre de 2020, contra dicho acto NO procede recurso administrativo alguno artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La notificación del Acto Administrativo Resolución # 4133.010.21.0. 938 del 20 de agosto de 2021, expedida por la Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA, se considerara surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN: En Santiago de Cali, hoy Miércoles, 28 de Abril del 2021, siendo las 8:00 de la mañana, se fija el presente AVISO, en la cartelera del área jurídica, lugar público del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, por un término de CINCO (05) días.

HECTOR FABIO RINCON MUÑOZ
Abogado Contratista

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: En Santiago de Cali, hoy _____ del 2021, siendo las 6:00 de la tarde, se desfija el presente AVISO, el cual se encontraba en lugar público del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, conforme lo establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

HECTOR FABIO RINCON MUÑOZ
Abogado Contratista

✓



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA- a través de la Dirección General, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Constitución Política de Colombia de 1991, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Municipal No. 018 de 1994, la Ley 1333 de 2009, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto Extraordinario Municipal No. 0516 de 2016, demás normas concordantes y;

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

1. Que mediante Oficio con radicado No. 2016413300024154 del 19 de mayo de 2016 la Líder del Grupo de Arborización y Zonas Verdes del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en adelante DAGMA, remitió al coordinador del Área Jurídica de la misma Entidad el Concepto Técnico de Afectación a la Cobertura Arbórea del 3 de mayo de 2016, elaborado a partir de la visita de verificación de la tala de un individuo forestal ubicado en la carrera 62A No. 5-50, barrio Cañaveralejo, comuna 19 de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, la cual fue denunciada por la comunidad telefónicamente. Se establece en el Concepto Técnico que *“se observó una zona de antejardín correspondiente a la dirección en mención, donde fueron retirados dos individuos forestales arbustivos sin previa autorización de la Entidad Ambiental. De acuerdo con lo comunicado por el señor Marco Antonio Mosquera, encargado de la obra (...) la señora Aleyda Navia quien es la propietaria, fue quien ordenó la tala de los mismos”*.
2. Que mediante Auto No. 1257 del 31 de mayo de 2016 la Dirección General del DAGMA ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra de la señora ALEYDA NAVIA, en su calidad de propietaria del predio ubicado en la carrera 62A No. 5-50, barrio Cañaveralejo, comuna 19 de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, a fin de establecer si existía o no mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en su contra.
3. Que mediante el artículo primero del Auto No. 1654 del 22 de julio de 2016 la Dirección General del DAGMA dispuso abrir investigación en contra de la señora ALEYDA NAVIA, en su calidad de propietaria del predio ubicado en la carrera 62A No. 5-50, barrio Cañaveralejo, comuna 19 de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali.
4. Que mediante el artículo segundo del Auto No. 1654 del 22 de julio de 2016 la Dirección General del DAGMA formuló cargo único en contra de la señora ALEYDA NAVIA, en su calidad



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

de propietario del predio ubicado en la carrera 62A No. 5-50, barrio Cañaveralejo, comuna 19 de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, consistente en la *"Tala de dos (2) individuos forestales arbustos, sin el permiso de la Autoridad Ambiental"*.

5. Que el Auto No. 1654 del 22 de julio de 2016 fue notificado por Aviso fijado el 27 de octubre de 2016 en lugar público de las instalaciones del DAGMA, y desfijado el 2 de noviembre de 2016.

6. Para el caso en concreto se evidencia que se incurrió en un error procedimental al expedir el Auto No. 1654 del 22 de julio de 2016 *"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN Y SE FORMULAN CARGOS"* en el que se inició un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental y se formularon cargos en contra de la señora ALEYDA NAVIA, en su calidad de propietaria del predio ubicado en la carrera 62A No. 5-50, barrio Cañaveralejo, comuna 19 de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, en el marco del proceso sancionatorio con tabla de retención documental (TRD) No. 4133.0.9.9.463-2016.

7. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Auto No. 1654 del 22 de julio de 2016 por medio del cual se inició un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental y se formularon cargos, se expidió sin el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales establecidos por el ordenamiento jurídico para este tipo de actos administrativos, con violación del principio de legalidad y el principio y derecho constitucional fundamental del debido proceso, dado que en el pliego de cargos se identificó al presunto infractor y se expresaron las acciones que constituyen la infracción ambiental, pero no se individualizaron las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, conforme lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, motivo por el cual se configuró un defecto procedimental que atenta contra el debido proceso del presunto infractor, especialmente su derecho de defensa y contradicción, debido a que no se realizó una imputación fáctica ni jurídica.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

La Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en el Capítulo IX la *"Revocatoria directa de los actos administrativos"*.

En el artículo 93 del mencionado Código se establecieron las causales de revocación directa de los actos administrativos, señalando que los mismos deberán ser revocados por las

4



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Ahora bien, frente a la improcedencia de la revocatoria directa, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró en su artículo 94 lo siguiente:

“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

En cuanto a la oportunidad, el artículo 95 del Código ídem establece que *“la revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda”* y, menciona además, que *“las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud y que contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso”*.

Respecto a los efectos de la revocatoria directa, el artículo 96 ídem, señala que *“Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo”*.

Respecto a la revocación de actos de carácter particular y concreto, menciona el artículo 97 ídem que:

“Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa".

La Corte Constitucional ha definido la revocatoria directa en el ámbito de las actuaciones administrativas, en cuanto acto constitutivo, como *"una decisión invalidante de otro acto previo, decisión que puede surgir de oficio o a solicitud de parte, y en todo caso, con nuevas consecuencias hacia el futuro. En la primera hipótesis el acto de revocación lo dicta el funcionario que haya expedido el acto administrativo a suprimir, o también su inmediato superior. En la segunda hipótesis, el acto de revocación lo profiere el funcionario competente a instancias del interesado"*¹; y en cuanto a modalidad de contradicción ha señalado que la revocatoria es *"un recurso extraordinario administrativo (...)"*².

La revocatoria directa tiene como propósito *"el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. (...)"*³. (Subrayado fuera del texto original).

Frente a la naturaleza de la revocatoria directa la Corte Constitucional precisó que, *"La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad jurídica"*⁴.

En cuanto a la finalidad de la revocatoria directa se ha indicado que *"es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto*

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2003. Magistrado Ponente: JAIME ARAÚJO RENTERIA.

² Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2003. Magistrado Ponente: JAIME ARAÚJO RENTERIA.

³ Corte Constitucional. Sentencia C-742 de 1999. Magistrado Ponente: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-742 de 1999. Magistrado Ponente: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona".⁵ (Subrayado fuera del texto original).

Según el tratadista Santofimio Gamboa, la eficacia es una consecuencia de la existencia del acto administrativo *"que lo hace apto y capaz de producir los efectos para los cuales se expidió"*⁶. En ese orden de ideas, cuando un acto fue producido dentro de los parámetros legales y es por lo tanto válido, fecunda en sí mismo la eficacia para lograr los fines que persigue en su creación. Lo anterior, bajo el entendido de que los Actos Administrativos alteran, modifican o extinguen sustancialmente el mundo jurídico exterior.

Dicha eficacia se ve afectada cuando se determina la revocatoria directa del acto administrativo, toda vez que dicha declaratoria no permite *"(...) que continúe vigente y produzca efectos un Acto contrario al orden jurídico o al interés público social, es decir, el imperio del principio de legalidad y el de la oportunidad y conveniencia de la administración, entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio (...)"*⁷

Que la revocatoria directa de un acto administrativo funciona *"como un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas"*⁸. De esta manera, al decretarse, implica la extinción del acto administrativo en el ordenamiento jurídico con efectos retroactivos, lo que supone que *"las cosas vuelven a su estado anterior a la expedición del acto"*⁹.

DE LOS EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

El Consejo de Estado a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sentencia 25000232500020110132401 del 29 de enero de 2015 (C.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ) indicó frente a los efectos de la revocatoria directa, que en sentencia del 15 de septiembre de 2013 de esa misma sala, Actor: Amelia Guio Vergara, Exp. No. 2166-07 M.P., Doctor Gerardo Arenas Monsalve, sostuvo que los efectos de la revocatoria de los actos administrativos por parte de la Administración son únicamente hacia el futuro. Se dijo, así:

"(...)"

⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-742 de 1999. Magistrado Ponente: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO.

⁶ GAMBOA, Santofimio "Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento, eficacia y validez. Pág.320. Universidad Externado de Colombia. (2003) 4ta edición.

⁷ GAMBOA, Santofimio "Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento, eficacia y validez. Pág.320. Universidad Externado de Colombia. (2003) 4ta edición. Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de noviembre 14 de 1975, C.P. Luis Carlos Sáchica, ACE, T. LXXXIX, N°s 447-448, 1975, p. 79.

⁸ Consejo de Estado colombiano. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 2011-00109/51376 de noviembre 26 de 2015. (M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa).

⁹ BERROCAL GUERRERO Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá, abril de 2.009, página 476. Citado por: Universidad Nacional de Colombia. (2013) Consultado en: <http://bdigital.unal.edu.co/9877/1/700600.2013.pdf>.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

No obstante lo anterior, debe precisarse que tal expresión del principio de la autotutela no trae consigo los efectos de la clásica declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad, a saber, del control judicial, sino que constituye un "juicio de valor intrínseco"¹⁰ que se traduce, como quedó visto, en la exclusión del ordenamiento jurídico de los efectos del acto administrativo objeto de dicha medida únicamente hacia el futuro, esto es, ex nunc.

(...)

Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la revocatoria directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva, esto es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio, o a través del cual se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que implica que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacia el futuro y, en segundo lugar, porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que el acto administrativo ha cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y ejecutoriedad, entendidas éstas como la eficacia que el acto comporta de cara a su cumplimiento, así como la capacidad que tiene la administración para hacerlo cumplir sin necesidad de la intervención de autoridad distinta.

Atribuirle a la revocatoria directa de un acto administrativo particular efectos, ex tunc, esto es, en forma retroactiva no sólo haría desaparecer del mundo jurídico, bajo una ficción, los efectos que éste ha producido desde el momento mismo en que nació a la vida jurídica, sino que, como consecuencia de ello, daría lugar, en sede administrativa, a un eventual reconocimiento de los perjuicios irrogados a la parte que vio afectados sus derechos durante la vigencia del acto".

En ese mismo sentido, el Alto Tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo manifestó lo siguiente en la Sentencia 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12) del 26 de octubre de 2017 (C.P. CARMELO PERDOMO CUÉTER) frente a los efectos de la revocatoria directa de los actos administrativos:

Esta Sala, en sentencia de 17 de noviembre de 2016¹¹, recordó:

«...que la revocatoria directa es una figura que le permite a la administración excluir del mundo jurídico los efectos de una decisión que nació a través de medios contrarios al ordenamiento jurídico. Lo anterior, únicamente con efectos ex nunc, esto es hacia el futuro, de manera que la revocatoria de un acto administrativo per se no trae consigo el resarcimiento de perjuicios a favor de quien se ha visto afectado en un derecho durante el tiempo que el acto permaneció vigente.».

DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, CELERIDAD Y ECONOMÍA PROCESAL

¹⁰ Consejo de Estado. Sentencia de 13 de mayo de 2009. Rad. 15652. MP. Myriam Guerrero de Escobar. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

¹¹ Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, CP César Palomino Cortés, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15)



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El artículo 209 de la Constitución Política consagra que *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”*.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-826 de 2013 se pronunció de la siguiente forma sobre los principios de eficacia, eficiencia y celeridad:

En cuanto a los principios de eficacia y eficiencia esta Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación *“...al cumplimiento de las determinaciones de la administración”* y la eficiencia a *“...la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos”*.

En cuanto al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general.

Por su parte, el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia C-404 de 1997 apuntó lo siguiente frente al principio de economía procesal:

Las dos normas citadas consagran dos de los principios reconocidos por el artículo 228 de la Constitución: el primero, el de la economía procesal, en lo que tiene que ver con el pronto diligenciamiento de los procesos: *“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”*. (...)

(...) Economía procesal que implica conseguir los resultados del proceso (el establecimiento de la verdad como medio para lograr la realización del derecho sustancial), con el empleo del mínimo de actividad procesal, naturalmente sin violar el derecho fundamental al debido proceso, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución.

DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA

La legalidad entendida como elemento de un Estado de derecho no se enmarca en los preceptos del positivismo legal, es decir, no puede ser asimilada únicamente como el *“acatamiento o sometimiento de la ley en estricto sentido”*¹². En otras palabras, el principio de legalidad debe asimilarse desde una visión material del concepto, de esta manera, tanto para

¹² GAMBOA, Santofimio. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento, eficacia y validez. Tomo I. Capítulo 4. Pág.379. Universidad Externado de Colombia. (2003) 4ta edición.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

gobernantes como para gobernados establece la sumisión al bloque de legalidad, el cual comprende no sólo disposiciones normativas específicas sino normas generales, principios y valores¹³.

Para los gobernantes, el ejercicio de sus funciones se ciñe al régimen de derecho entendido desde una vertiente formal y otra teleológica; la primera como acatamiento de la norma en estricto sentido, y la segunda, como forma de satisfacer el interés general y el bien común de los asociados¹⁴.

De tal forma, el bloque de legalidad compuesto por normas, principios y valores contiene entre otros principios el del debido proceso.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el debido proceso como un derecho fundamental que debe ser garantizado en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública.

El artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011— establece además que las actuaciones y procedimientos administrativos deben interpretarse y aplicarse a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera del mismo Código y en las leyes especiales, y que además se desarrollan especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Así, respecto del derecho fundamental al debido proceso, en Sentencia T-1263 de 2001 la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

“(…) Para lo que interesa a la presente causa, se ha entendido el derecho al debido proceso administrativo, como (…) la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados por la ley”. Según lo dicho, el debido proceso administrativo se constituye en una expresión del principio de legalidad, que implica que toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, así como también las funciones que le corresponden y los trámites que deben cumplirse antes y después de proferirse una determinada decisión. De ahí que este derecho emerge no solamente para impugnar la decisión administrativa, sino que comprende toda la actuación administrativa

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem. Pág.380.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

que debe surtirse para expedirla y posteriormente la etapa que corresponde a la comunicación e impugnación. (Subrayado fuera del texto original).

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado en Sentencia 2003-01689 de julio 23 de 2015¹⁵ indicó que el principio y derecho constitucional del debido proceso resulta aplicable aún en el ámbito de la actuación administrativa e implica que las autoridades actúen de conformidad con las competencias que le fueron atribuidas legalmente y con la plenitud de las formas propias de cada procedimiento, todo en aras de proteger y garantizar a los administrados el derecho de audiencia y defensa, esto último con el fin de que aporten y controviertan las pruebas que consideren necesarias.

De manera concreta, en la sentencia C-980 de 2010 el Tribunal Constitucional señaló que el debido proceso administrativo ha sido definido jurisprudencialmente como:

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”¹⁶. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”¹⁷.

En la misma providencia, se determinó que las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes:

“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.” (Subrayado fuera del texto original).

X

¹⁵ Consejo de Estado colombiano. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia Rad. 680012331000200301689-01 (M.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas). 2015. Consultado en: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/legal/litigios/septiembre/cuarta/CE%20Sentencia%2020035.pdf>.

¹⁶ Sentencia T-796 de 2006.

¹⁷ Ibidem.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia C-412 de 2015 indicó, con base en la aplicación del debido proceso, los siguientes requisitos para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la administración:

- i. una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén desarrollados todos los elementos del tipo sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones que la propia ley impone;
- ii. que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción en el caso concreto, y
- iii. que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar el debido proceso.

DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Señala la Corte Constitucional en la sentencia C-713 de 2012 que en la materialización del principio de legalidad participa el principio de tipicidad, el cual se concreta a través de la descripción completa, clara e inequívoca del precepto - la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción - y de la sanción - la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto -¹⁸ y busca que la descripción que haga el legislador sea de tal claridad que permita que sus destinatarios conozcan exactamente las conductas reprochables, evitando de esta forma que la decisión sobre la consecuencia jurídica de su infracción, pueda ser subjetiva o arbitraria¹⁹.

Sobre el particular, esta Corporación en Sentencia C-343 de 2006, señaló que: *"Uno de los principios esenciales comprendidos en el artículo 29 de la Constitución Política es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la "exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras."*²⁰

Es así como para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir los siguientes elementos:

(i) *Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la*

¹⁸ Sentencia C-739 de 2000.

¹⁹ Sentencia C-739 de 2000.

²⁰ Sentencia C- 827 de 2001.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

*aplicación de otras normas jurídicas; (ii) Que exista una sanción cuyo contenido material este definido en la ley; (iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción;*²¹

DEL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

Establecido como una garantía en virtud del debido proceso administrativo, el derecho de defensa y contradicción, tal como lo señala la Corte Constitucional en sentencia C-025 de 2009, permite a toda persona el ser oída, hacer valer sus propias razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra, solicitar la práctica y evaluación de las que se estimen favorables, así como ejercitar los recursos que le otorga la ley.

Doctrinariamente, se ha establecido que el derecho de defensa *“concreta la garantía de la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer sus facultades de presentar argumentaciones y pruebas. De este modo, el derecho de defensa garantiza la posibilidad de concurrir al proceso, hacerse parte en el mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas. Cabe decir que este derecho fundamental se concreta en dos derechos: en primer lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, el derecho a la defensa técnica.”*²²

En este sentido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional manifestó en la sentencia T-051 de 2016 que el derecho de defensa, puntualmente, *“se centra en la posibilidad de que el administrado conozca y tenga la posibilidad de hacer parte del procedimiento que lo involucra y, a partir de ahí, exponer su posición y debatir la de la entidad correspondiente por medio de los recursos y medios de control dispuestos para el efecto”*. Por su parte, sobre el derecho de contradicción, precisó que este *“tiene énfasis en el debate probatorio, implica la potestad de presentar pruebas, solicitarlas, “participar efectivamente en [su] producción” y en “exponer los argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba”*²³.

En conclusión, esta garantía procesal consiste, *“primero, en la posibilidad de que el particular, involucrado en un procedimiento o proceso adelantado por la administración, pueda ser escuchado y debatir la posición de la entidad correspondiente; segundo, presentar pruebas, solicitar la práctica de las que se considere oportuno y, de ser pertinente, participar en su producción; tercero, controvertir, por medio de argumentos y pruebas, aquellas que contra él*


²¹ Cita tomada de la Sentencia C-713 de 2012.

²² Bernal Pulido, Carlos. EL DERECHO DE LOS DERECHOS. Escrito sobre la aplicación de los derechos fundamentales. Universidad Externado de Colombia, primera edición 2005. (págs. 333-377). Cita extraída de la Sentencia T-544 de 2015.

²³ Desde ese enfoque, en la Sentencia T-461 de 2003, se indicó que la vulneración de la garantía de contradicción “se presenta cuando se impide o niega la práctica de pruebas pertinentes, conducentes y oportunas en el proceso”.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

se alleguen; cuarto, la posibilidad de interponer los recursos de ley y, quinto, la potestad de ejercer los medios de control previstos por el legislador”²⁴

DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS

En palabras de Enrique José Arboleda Perdomo *“El pliego de cargos le imputa a una persona una conducta o unos hechos a título de falta sancionable, de manera que el investigado deberá defenderse de esta imputación, demostrando que alguno de los elementos que la constituyen no son ciertos, o que él no los realizó”²⁵*.

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce su potestad sancionadora, el pliego de cargos puede definirse como la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa, y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio²⁶.

La Ley 1333 de 2009 en su artículo 24 establece, sobre la formulación de cargos, lo siguiente:

“ARTÍCULO 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser

²⁴ C-034 de 2014.

²⁵ ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. Bogotá D.C: Legis Editores S.A., 2012. p.89.

²⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00(0384-10). Febrero 16 de 2012. Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo". (Subrayado fuera del texto original).

Por su parte, en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011— se establece:

"ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

PARÁGRAFO. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia." (Subrayado fuera del texto original).

Resulta importante resaltar el mandato legal dispuesto en el ordenamiento jurídico para las autoridades administrativas, de consagrar expresamente dentro del pliego de cargos las acciones u omisiones que constituyen la infracción, e individualizar las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, en



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

araras de garantizar el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa y contradicción del presunto infractor.

ESTUDIO DEL CASO CONCRETO

Mediante Auto No. 1654 del 22 de julio de 2016 la Dirección General del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA formuló el siguiente cargo:

“ARTÍCULO SEGUNDO: FORMULAR contra la Señora ALEYDA NAVIA el siguiente cargo:

- Tala de dos (2) individuos forestales arbustos, sin el permiso de la Autoridad Ambiental”.*

Se hace evidente que en el pliego de cargos se identificó al presunto infractor y se consagraron expresamente las acciones u omisiones que constituyen la infracción ambiental, pero no se individualizaron las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, incumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, lo que se traduce en una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una imputación fáctica ni una imputación jurídica.

Teniendo en cuenta las causales de la revocatoria directa consagradas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecido en la Ley 1437 de 2011, se tiene que en el caso que nos ocupa se configura una violación al derecho fundamental al debido proceso, toda vez que la formulación de cargos en contra de la señora ALEYDA NAVIA, no se ajustó a los parámetros legales establecidos para la expedición de este tipo de actos administrativos, al no individualizar en el pliego de cargos las normas ambientales que se estimaron violadas, lo que impide al presunto infractor ejercer los derechos de defensa y contradicción en forma precisa, clara y efectiva, vulnerando tanto el debido proceso, como los principios de legalidad y de tipicidad de la conducta, por lo que se evidencia que existe una *“manifiesta oposición a la Constitución Política y la Ley”*²⁷.

De esta manera, resulta procedente la declaración de revocatoria del acto administrativo antes aludido, pues al configurarse esta causal deberá perder su eficacia, es decir no deberá continuar produciendo efectos jurídicos.

Por consiguiente, es menester revocar dicha actuación procesal en aras de garantizar la protección del derecho fundamental del debido proceso de la señora ALEYDA NAVIA, y por lo tanto dejar sin efectos el mencionado acto administrativo.

²⁷ Numeral 1 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Por su parte, frente a los documentos y demás material que pueda llegarse a catalogar como probatorio —que se encuentra en el expediente con tabla de retención documental (TRD) No. 4133.0.9.9.463-2016 en contra de la señora ALEYDA NAVIA—, se considera la plena validez y eficacia de los mismos, aún luego de la revocatoria del acto administrativo; fundándose tal posición, en primer lugar, en los efectos de la revocatoria directa, los cuales son hacia el futuro (ultractivos o ex nunc) y no hacia el pasado (retroactivos o ex tunc), lo que indica que el acto administrativo y las actuaciones que se derivaron del mismo fueron válidos y cumplieron sus efectos en su momento, y que si bien es necesaria su revocatoria en consideración a la violación al debido proceso, no resulta admisible, en segundo lugar, en seguimiento a los principios de eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal —que rigen la función administrativa— que los documentos y demás actuaciones que surgieron a partir de este desaparezcan de la vida jurídica, pues ello conllevaría a que la administración pública tuviere que recabar nuevamente los mismos elementos, significando un desgaste administrativo y presupuestal inoficioso, y una demora en la toma de decisiones.

Ahora bien, debe indicarse que al existir un presunto incumplimiento de la norma que regula el aprovechamiento de individuos arbóreos por la señora ALEYDA NAVIA, esta autoridad ambiental procederá, posteriormente y en debida forma, a iniciar el proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con el debido seguimiento a la ritualidad procesal establecida en la ley ibídem.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar de oficio el Auto No. 1654 del 22 de julio de 2016 por medio del cual se inició investigación y se formularon cargos en el marco del proceso administrativo sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora ALEYDA NAVIA, de conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—.

ARTÍCULO SEGUNDO. Advertir que la revocatoria declarada de oficio en este acto administrativo no genera como consecuencia el archivo del caso, pues al existir un presunto incumplimiento de la norma que regula el aprovechamiento de individuos arbóreos por la señora ALEYDA NAVIA, esta autoridad ambiental iniciará, posteriormente y en debida forma, el proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con el debido seguimiento a la ritualidad procesal establecida en la ley ibídem.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 4133.010.21.0.367 DE 2020
15/DIC/2020

POR LA CUAL SE REVOCAN DE OFICIO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO TERCERO. Dejar incólumes los soportes probatorios recaudados en el expediente sancionatorio con TRD No. 4133.0.9.9.463-2016 abierto en contra de la señora ALEYDA NAVIA, por el presunto incumplimiento de la norma que regula el aprovechamiento de individuos arbóreos.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora ALEYDA NAVIA, ubicada en la carrera 62A No. 5-50, barrio Cañaveralejo, Comuna 19 de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y siguientes del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011—.

ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-.

Dada en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de diciembre de Dos Mil Veinte (2020).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN
Director DAGMA

Proyectó: José Fernando Niño Morales – Contratista
Revisó: Diana Imelda Quiroga Varón – Contratista.